



ENTRE LA EXCLUSIÓN Y LA ESPERANZA: COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

América Latina y el Caribe se destaca por contar con una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, pero persisten retos estructurales en el acceso y la equidad del suministro eléctrico, y ligados a la pobreza energética. Las comunidades energéticas son una experiencia emergente en la región que propone una vía concreta hacia la democratización energética.

En la vida cotidiana, damos por sentadas muchas cosas que solo notamos cuando dejan de funcionar. Se vuelven parte del entorno habitual hasta que su ausencia revela su importancia. La electricidad es un claro ejemplo: un recurso esencial que rara vez cuestionamos, salvo ante un corte o al recibir la factura. Tal vez por su complejidad técnica, o porque la percibimos solo a través de aparatos como bombillas o electrodomésticos, suele quedar fuera del debate. Sin embargo, eventos como el apagón en la península ibérica muestran cuán central es en la vida moderna.

Más allá de las imágenes romantizadas del apagón —como el retorno fugaz a una vida más comunitaria y desconectada—, la falta de electricidad es una realidad diaria para millones. Hoy, unos 750 millones de personas carecen de acceso, incluidos 18 millones en América Latina y el Caribe (ALC) (IEA, 2024b). En esta región, el problema no es solo la falta de acceso, sino también la forma en que se accede: cortes frecuentes (como en Venezuela), tarifas altas, infraestructura deficiente y sistemas energéticos centralizados, con baja competencia y escasa capacidad regulatoria. En este escenario, resulta imprescindible hablar de democratización energética.

Mientras Europa debate la transición hacia fuentes limpias para enfrentar el cambio climático, en ALC el foco también incluye la descarbonización, aunque muchos países ya cuentan con matrices relativamente limpias, basadas en hidroeléctrica o gas natural. Sin embargo, el desafío no es solo cambiar la fuente, sino transformar el modelo de acceso y gestión. Este ensayo se centrará en las comunidades energéticas como una experiencia emergente en la región que

propone una vía concreta hacia la democratización. Al involucrar a las personas en decisiones sobre producción, distribución y consumo, estas iniciativas no solo ofrecen soluciones técnicas, sino también mayor voz, agencia y participación en un sector históricamente centralizado.

El problema no es solo la falta de acceso, sino también la forma en que se accede: cortes frecuentes, tarifas altas, infraestructura deficiente y sistemas energéticos centralizados, con baja competencia y escasa capacidad regulatoria.

Contexto regional

Según Ember (2025), ALC se destaca por contar con una de las matrices eléctricas más limpias del mundo. En 2024, el 65% de la electricidad generada en la región provino de fuentes limpias, muy por encima del promedio mundial del 41%. Esta fortaleza se debe principalmente al papel histórico de la energía hidroeléctrica, que aporta el 41% del suministro eléctrico regional y es la base del sistema en países como Paraguay y Costa Rica, donde prácticamente toda la electricidad proviene de fuentes renovables. A esta base hidráulica se suman el crecimiento sostenido de la energía solar y eólica, que ya representan un 17% de la generación eléctrica regional (por encima del 15%

global), con países como Chile (34%) y Uruguay (31%) liderando su integración. Brasil, por su parte, añadió 36 TWh en 2024, lo que equivale al 78% del crecimiento regional y al 7% del crecimiento global.

Este avance en energías renovables ha reducido significativamente la dependencia de combustibles fósiles en el sector eléctrico, cuya participación bajó del 47% en 2015 al 35% en 2024. El carbón, en particular, apenas representa el 4% de la generación eléctrica y está presente en pequeña escala solo en países como México, Brasil, Colombia y República Dominicana, sin planes relevantes de expansión. Sin embargo, el gas natural aún mantiene una cuota del 24% y tuvo un repunte de 21 TWh entre 2023 y 2024, debido principalmente a sequías que afectaron la generación hidroeléctrica en países como Brasil, Colombia y Ecuador. En 2024, la electricidad en la región emitió 255 gCO₂/kWh, muy por debajo del promedio mundial de 473 gCO₂/kWh, gracias al predominio de fuentes limpias. Aunque los combustibles fósiles aún dominan sectores como transporte e industria, su menor presencia en la electricidad es un avance significativo.

Sin embargo, persisten retos estructurales en el acceso y la equidad del suministro eléctrico. Entre 2001 y 2019, la proporción de hogares con acceso a electricidad creció del 87% al 95,1%, con una mejora especialmente notoria en las zonas rurales, donde pasó del 65,3% al 87,5%. Sin embargo, las cifras agregadas ocultan disparidades profundas entre países, regiones y grupos sociales. Mientras Brasil, Paraguay, Uruguay y Costa Rica registran niveles de privación inferiores al 0,5%, otros países como Guatemala (22,1%), Nicaragua (14,3%), El Salvador (11,1%) y Honduras (7,4 %) siguen pre-



sentando importantes brechas (CEPAL, 2022). Factores como el origen étnico, la ubicación geográfica y el nivel de ingresos también influyen significativamente en el acceso.

Pobreza energética

Ciertamente, el acceso a la electricidad ha mejorado en ALC; sin embargo, persisten desafíos estructurales ligados a una pobreza energética poco conceptualizada frente al enfoque europeo. Mientras países como Reino Unido o Francia han definido esta problemática de forma multidimensional – incluyendo el porcentaje del ingreso destinado a servicios o la capacidad de mantener una temperatura adecuada —, en ALC predomina una visión limitada centrada en el acceso físico o el tipo de energía utilizada. Esta mirada restringida impide captar la magnitud real del problema. Haití, por ejemplo, tiene al 98% de su población rural sin acceso. En Honduras y Nicaragua, la exclusión es del 11,2% y 29%, también concentrada en zonas rurales que conforman el 40% de la población. Incluso en países con alta cobertura, como México, en 2024 se estimaba que 1,2 millones de personas seguían sin servicios, ya sea por vivir en zonas remotas o por no poder cubrir los costos de conexión y facturación en sectores urbanos marginados (World Bank, 2023).

Otro aspecto central en los estudios sobre pobreza energética en la región es el tipo de combustible utilizado para cocinar. Mientras que en República Dominicana, Uruguay y Brasil alrededor del 94% de los hogares utiliza gas, en países como Honduras el 76,9% aún depende de leña, carbón, kerosene o petróleo. Esta situación expone a las familias —especialmente a mujeres y niños— a altos niveles de humo en espacios cerrados, con efectos negativos sobre la salud y consecuencias ambientales por la presión sobre los recursos forestales. Paraguay, pese a su amplia generación hidroeléctrica y acceso a electricidad, registra un 32,8% de hogares que cocinan con combustibles tradicionales. No obstante, destaca por tener uno de los mayores porcentajes de uso de electricidad para cocinar (13,6%), solo superado por Costa Rica (48,7%) (CEPAL, 2022).

La pobreza energética también incluye la capacidad de usar la electricidad para fines básicos como la refrigeración de

EL RETO DE DEMOCRATIZAR LA ENERGÍA EN ALC

La democratización de la energía en ALC va más allá del acceso a la electricidad: implica asegurar energía segura, asequible, sostenible y gestionada con participación ciudadana. Para avanzar, es necesario repensar un modelo energético que ha concentrado el poder en grandes corporaciones o entes estatales con escasa transparencia. Democratizar la energía requiere descentralizar la generación, fortalecer el control público y comunitario, y garantizar una planificación territorial participativa. Esto no solo combate la pobreza energética, sino que permite una transición justa, con empleo, menor contaminación y más soberanía. Sin embargo, alcanzar este modelo exige revisar las reformas estructurales impulsadas desde los años 80, cuando muchos países privatizaron y fragmentaron sus sistemas eléctricos bajo presión por deuda y desequilibrios macroeconómicos. Esta apertura atrajo unos 155.000 millones de dólares en inversión privada entre 1984 y 2011, con casos como Nicaragua (90%) y Colombia (30%) mostrando alta participación privada. Aunque se prometía eficiencia, competencia y mejor servicio, el resultado fue tarifas altas, baja cobertura rural y escasa participación social (Jimenez Mori et al., 2013). Democratizar la energía hoy implica superar los modelos privatizadores y avanzar hacia políticas participativas, sostenidas por marcos institucionales que garanticen equidad y sostenibilidad ambiental.

A través de proyectos gestionados directamente por ciudadanos, cooperativas u organizaciones de base, se están desarrollando esquemas energéticos que no solo diversifican la matriz energética, sino que fortalecen la participación comunitaria, ...

alimentos, la iluminación nocturna o la climatización. Sin embargo, indicadores más precisos limitan la posibilidad de diseñar políticas públicas integrales que aborden cobertura, calidad, asequibilidad y sostenibilidad del acceso a la energía eléctrica.

Democratización de la energía y comunidades energéticas

Las comunidades energéticas son formas de organización colectiva donde ciudadanos, cooperativas o municipios participan activamente en la generación, gestión y consumo de energía renovable. Estas iniciativas promueven la descentralización, reducen la dependencia de grandes empresas y empoderan a las personas en decisiones clave sobre el sistema energético (Baigorrotegui & Chemes, 2023). En América Latina, representan una oportunidad concreta para materializar la democratización

TABLA 1. PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR ELÉCTRICO
Fuente: Valencia & Hallack (2022).

	Generación	Transmisión	Distribución
País			
Argentina			
Bahamas			
Barbados			
Belize			
Bolivia			
Brasil			
Chile			
Colombia			
Costa Rica			
Ecuador			
El Salvador			
Guatemala			
Guyana			
Hati			
Honduras			
Jamaica			
México			
Nicaragua			
Panamá			
Paraguay			
Perú			
República Dominicana			
Surinam			
Trinidad & Tobago			
Uruguay			
Venezuela			



de la energía desde lo local, integrando sostenibilidad, justicia social y autonomía territorial.

En este contexto, las comunidades energéticas emergen en ALC como una estrategia poderosa para avanzar en la transición energética desde una lógica inclusiva y territorializada. Frente a las limitaciones persistentes en el acceso y la calidad del suministro eléctrico – especialmente en zonas rurales y barrios vulnerables – estas iniciativas ofrecen soluciones sostenibles con fuerte arraigo local. A través de proyectos gestionados directamente por ciudadanos, cooperativas u organizaciones de base, se están desarrollando esquemas energéticos que no solo diversifican la matriz energética, sino que fortalecen la participación comunitaria, fomentan la apropiación tecnológica y aseguran la permanencia de las soluciones instaladas.

Ejemplos concretos ilustran cómo esta transformación ya está en marcha. Chile ha institucionalizado programas como Comuna Energética y Comunidad Energética, que articulan a municipios, ciudadanía y organizaciones para ejecutar proyectos de generación renovable, eficiencia energética y educación. En Brasil y Costa Rica, cooperativas eléctricas con trayectoria desde los años 60 han sido revitalizadas por marcos normativos recientes, y hoy incorporan energías limpias con modelos participativos. Panamá destaca con el Programa de Campeonas Solares, que empodera a mujeres indígenas en la gestión de sistemas fotovoltaicos. A nivel comunitario, iniciativas como RevoluSolar en favelas de Río de Janeiro y el proyecto RESEX en la Amazonía brasileña han permitido reducir costos, mejorar el servicio y generar ingresos productivos mediante el uso eficiente de la energía. Colombia, por su parte, se adelanta al establecer el primer marco normativo específico para comunidades energéticas, sentando un precedente clave para la región (IEA, 2024a).

Colombia ha avanzado significativamente al incluir a las comunidades energéticas en su política pública, integrando marcos normativos que permiten su desarrollo junto a actores sociales, públicos y privados. Este esfuerzo se refleja en experiencias como la Comunidad Energética de Paz “El Sol del Perijá” en La Guajira, donde firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades campesinas e indígenas

impulsan proyectos solares que transforman territorios históricamente excluidos, promoviendo acceso a energía, sostenibilidad económica y reconciliación. Iniciativas similares surgen en Medellín, Tumaco, el Chocó y Cali, donde proyectos como Casas de Energía Sustentable benefician a miles de familias con energía limpia y asequible.

Además, decretos recientes han habilitado la participación directa de comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales en la generación y comercialización de energías renovables, consolidando un enfoque de transición energética que busca reducir emisiones, reparar desigualdades y construir paz desde lo local (Ministerio de Minas y Energía, s. f.). Colombia ofrece así un ejemplo potente de cómo la energía puede convertirse en una herramienta de justicia, equidad y transformación social. ●

Referencias

- Baigorrotegui, G., & Chemes, J. (2023). Comunidades energéticas latinoamericanas: Sostenedoras de transiciones que mantienen y reparan la vida. *Energía y Equidad*, Julio(6). <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/225207>
- CEPAL (2022, mayo). La energía en América Latina y el Caribe: Acceso, renovabilidad y eficiencia. *Temas Estadísticos de la CEPAL*, 5. www.cepal.org/es/publicaciones/47924-la-energia-america-latina-caribe-acceso-renovabilidad-eficiencia
- Ember. (2025, abril 11). *Latin America and Caribbean. Clean power replacing emissions-intensive fossil fuels*. <https://ember-energy.org/countries-and-regions/latin-america-and-caribbean>
- IEA (2024a, septiembre 25). *Bottom-up energy transitions: Managing the rise of energy communities in Latin America*. International Energy Agency. www.iea.org/commentaries/bottom-up-energy-transitions-managing-the-rise-of-energy-communities-in-latin-america
- IEA (2024b, noviembre 15). *Electricity access continues to improve in 2024—After first global setback in decades*. International Energy Agency. www.iea.org/commentaries/electricity-access-continues-to-improve-in-2024-after-first-global-setback-in-decades
- Jimenez Mori, R. A., Balza, L., & Mercado Díaz, J. E. (2013). *Privatization, Institutional Reform, and Performance in the Latin American Electricity Sector*. Inter-American Development Bank. <https://doi.org/10.18235/0009146>
- Ministerio de Minas y Energía. (s. f.). *Comunidades Energéticas*. Recuperado 5 de junio de 2025, de <https://www.minenergia.gov.co/es/comunidades-energeticas/>
- Valencia, A., & Hallack, M. (2022, agosto 17). ¿Cuál es la participación del sector privado en el sector de energía eléctrica en América Latina y el Caribe? *BID. Energía para el Futuro*. <https://blogs.iadb.org/energia/es/cual-es-la-participacion-del-sector-privado-en-el-sector-de-energia-electrica-en-america-latina-y-el-caribe/>
- World Bank. (2023). *Access to electricity, rural (% of rural population) [Dataset]*. <https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCTS.RU.ZS>